

«Una casa para vivir, un hogar para crecer»

Nota ante la cuestión actual de la vivienda

En estos días, la cuestión de la vivienda ocupa nuevamente buena parte de nuestra conversación pública. Las dificultades para acceder a una vivienda digna afectan cada vez a más personas y familias y, de manera especial, a muchos jóvenes que, aun teniendo un trabajo —como ya escribí en mi carta pastoral *En Él, nuestra Esperanza* (2024)— encuentran enormes obstáculos para independizarse, formar una familia y construir su propio proyecto de vida. En aquella carta decía que el acceso a la vivienda «es uno de nuestros más graves problemas sociales».

Es el espacio en el que una persona puede echar raíces, cuidar y ser cuidada, educar a sus hijos y desarrollar una vida digna. No puede ser considerada ni sola ni primariamente como un bien económico. Por eso, cuando el acceso a ella se convierte para muchos en una dificultad casi insuperable, estamos ante un problema que afecta seriamente al bien común.

La Iglesia no entra ordinariamente en el juicio técnico sobre cada medida concreta que se debate, ni quiere sustituir el legítimo discernimiento de los poderes públicos acerca de las medidas concretas que deban adoptarse en esta materia. No obstante, eso no significa que deba permanecer al margen de su valoración moral: no todo lo que una ley permite o establece es, por ese solo hecho, justo o moralmente aceptable. Por ello, cuando están en juego la dignidad de las personas, sus derechos fundamentales y el bien común, la Iglesia tiene el deber de ofrecer una palabra que ilumine y dé criterios, recordando algunos principios fundamentales de su doctrina social: la dignidad de toda persona, el destino universal de los bienes, el derecho a la propiedad y su función social, la solidaridad y la responsabilidad de todos en la búsqueda del bien común.

Precisamente por la gravedad y complejidad del problema, y más aún cuando nuestro país se dispone a afrontar un nuevo proceso electoral, quizá sea este un buen momento para considerar que la cuestión de la vivienda necesita un esfuerzo colectivo capaz de mirar más allá de los tiempos electorales y de la legítima confrontación de partidos. Ese esfuerzo colectivo, para culminar con una solución compartida y duradera, debería ser suficientemente amplio y estable, permitiendo estudiar serenamente la realidad, escuchar a quienes mejor la conocen, debatir las distintas alternativas y acordar aquellas medidas más eficaces y sostenibles a medio y largo plazo.

Un esfuerzo de esta naturaleza debería implicar no solo a las distintas fuerzas políticas y a las administraciones públicas, sino también incorporar la experiencia y el conocimiento de expertos, entidades sociales, agentes económicos, propietarios, promotores, organizaciones que trabajan junto a las personas más vulnerables y otros representantes de la sociedad civil. La complejidad del problema exige escuchar muchas voces, estudiar con rigor las distintas propuestas y buscar soluciones realistas y duraderas, capaces de trascender las legítimas diferencias políticas y las respuestas meramente coyunturales.

Probablemente ningún acuerdo conseguirá resolver por completo una cuestión tan compleja en la que confluyen tantos factores. Pero alcanzar consensos básicos, ofrecer estabilidad a las políticas de vivienda y perseverar durante años en una misma dirección sería ya un paso importante. Hay asuntos que, por afectar tan directamente a la dignidad y al futuro de las personas, merece la pena abordarlos así. La convocatoria electoral que

se abre puede ser ocasión para que las diferentes fuerzas políticas presenten con claridad sus propuestas en esta materia, evitando convertir el sufrimiento y las legítimas preocupaciones de tantas personas en un instrumento de confrontación. Sería deseable que, más allá de las diferencias entre programas, pudiera ir madurando desde ahora la voluntad de alcanzar después acuerdos suficientemente amplios y duraderos.

También nosotros, como comunidad cristiana, estamos llamados no solo a participar responsablemente en este debate público, sino a dejarnos interpelar por él. La responsabilidad no corresponde únicamente a los poderes públicos. Un problema de esta magnitud reclama, en distinta medida y según las posibilidades y responsabilidades de cada uno, la colaboración de administraciones, agentes económicos y sociales, instituciones y ciudadanos. También alcanza a la Iglesia.

La Iglesia necesita sus bienes y recursos para sostener su misión pastoral, atender sus comunidades, conservar responsablemente el patrimonio que le ha sido confiado y servir a quienes más lo necesitan. Pero precisamente porque los bienes son necesarios y valiosos, administrarlos bien forma parte también de nuestra responsabilidad. Por ello debemos preguntarnos con sinceridad si los gestionamos de la mejor manera posible y si, allí donde las circunstancias lo permitan, podemos poner algunos de ellos al servicio de nuevas necesidades sociales. También en este ámbito estamos llamados a un discernimiento permanente y a una creciente coherencia evangélica.

No se trata de proponer soluciones fáciles ni de exigir a unos lo que no corresponde exigir a todos. Se trata más bien de reconocer que ante un problema tan serio cada cual está llamado a preguntarse qué puede aportar desde su propia situación, sus posibilidades y sus responsabilidades.

Porque una vivienda es mucho más que cuatro paredes: es el lugar donde una vida puede echar raíces y convertirse en hogar para crecer. Es lo primero que, siendo niños, nos enseñaron a dibujar. Favorecer que cada vez más personas puedan acceder a este bien tanpreciado merece un debate público sereno y responsable, propuestas realistas, acuerdos duraderos y el esfuerzo compartido de todos. En tiempo electoral necesitamos recordarnos, más aún si cabe, que, más allá de nuestras legítimas diferencias, el bien común debe seguir siendo un empeño responsable de todos. Recordar las tan aplaudidas palabras de nuestro papa León XIV, invitando a todos a “abandonar las narrativas divisivas y polarizantes”, pronunciadas en su reciente viaje apostólico, sin duda, nos hará mucho bien.

+ Fernando Prado Ayuso, CMF
Obispo de San Sebastián